

## **LECCIÓN 6:**

# **LOS DERECHOS COLECTIVOS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS.**

### **Sumario:**

#### **1.- Introducción.**

#### **2.- Los derechos colectivos básicos de los trabajadores autónomos.**

2.1.-Derechos de titularidad individual.

2.2.- Derechos de titularidad colectiva.

#### **3.- Las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos.**

#### **4.- La representatividad de las asociaciones de trabajadores autónomos.**

4.1.-Criterios de determinación de la representatividad.

4.2.- Facultades y derechos de las asociaciones representativas.

#### **5.- El Consejo del Trabajo Autónomo.**

#### **6.- Bibliografía.**

#### **7.- Sitios Web.**

#### **8.- Actividades.**

\* \* \* \* \*

### **1.- INTRODUCCIÓN.**

El Título III de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo (LETA), tal y como reza su rótulo, alberga la regulación de los derechos colectivos del trabajador autónomo. La amplitud, rotundidad y ampulosidad con que se presentan por parte de la Ley estos breves preceptos (artículos 19-22 LETA) podría generar en el intérprete expectativas que, a la postre, no se ven colmadas por el contenido real de dicha regulación. Como

afirmación de partida, conviene señalar que la LETA, como mínimo, ha renunciado explícitamente a abordar en toda su complejidad técnica la problemática de la aplicación a los trabajadores autónomos de derechos típicamente laborales como el de sindicación, huelga, negociación colectiva o adopción de medidas de conflicto colectivo (Artículos 28 y 37 CE), notoriamente ausentes entre los derechos constitucionales citados en el Preámbulo de la Ley. Derechos cuya traslación al ámbito de los autónomos, además de precisar de una cierta maduración del debate técnico y dogmático sobre el particular, presenta dificultades desde un punto de vista operativo. *(Resumen: La ausencia de los derechos colectivos típicamente laborales en la LETA).*

Partiendo de lo anterior, lo cierto es que en materia de derechos colectivos de los trabajadores autónomos, la LETA ofrece un panorama que podría calificarse como de mínima intervención normativa: esto es, de aceptación, con carácter general, de la situación normativa previamente existente, tratando de evitar todo tipo de interferencias en el anterior *status quo* (véanse, por ejemplo, las referencias de la Exposición de Motivos al propósito legal de no inmiscuirse en ámbitos como el sector agrario, que tienen sus propios cauces de representación, o los Colegios Profesionales), y ofreciendo al tiempo un tratamiento unitario y homogéneo en la materia. Pese a que la norma declara regular una nueva realidad social, lo que trata, en definitiva, es simplemente de normalizar lo carente de previsión y no tanto de transformar el régimen jurídico precedente, sin plantearse quizá si el mismo es el más adecuado para dicha nueva realidad.

*(Resumen: Un panorama de mínima intervención normativa)*

El Título III de la LETA, viene a aportar, así pues, una regulación *ex novo* de los derechos colectivos de los autónomos que se añade a la ya existente, pero que renuncia a provocar alteraciones o modificaciones normativas en la materia, como puede deducirse de la ausencia en la Ley de disposiciones derogatorias sobre el particular. Y, por otra parte, se trata de una regulación sin ningún tipo de elemento novedoso de diferenciación de cara a su proyección sobre el heterogéneo panorama de los trabajadores autónomos: se regulan, en dichos preceptos, los derechos colectivos de todos los trabajadores autónomos, de manera conjunta, y sin aparente necesidad diversificadora, quedando al margen de dicho tratamiento (Título II) aspectos que sólo

corresponden a los TAED como los acuerdos de interés profesional (artículo 13 LETA) o las alusiones a los procedimientos no judiciales de solución de conflictos (artículo 18 LETA), y que, en definitiva, no pertenecen al ámbito de incidencia de los artículos 28 y 37 CE.

La aludida postura de cautela del legislador a la hora de abordar los derechos colectivos de los autónomos es el motivo que justifica, así pues, que la LETA, dejando deliberadamente sin resolver el problema del alcance subjetivo de tales derechos constitucionales, sólo aborde centralmente las principales cuestiones precisadas de una respuesta legal más perentoria. A saber: el régimen jurídico de las asociaciones profesionales de autónomos, los criterios y problemas de representatividad de las mismas, el diálogo social y la instauración de canales para su institucionalización. El análisis de estas cuestiones se contiene en los epígrafes que siguen a continuación.

## **2.- LOS DERECHOS COLECTIVOS BÁSICOS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS.**

El artículo 19 LETA, adoptando un esquema paralelo al empleado por el artículo 2 LOLS en la delimitación del contenido de la libertad sindical, enumera los derechos colectivos básicos correspondientes a todos los trabajadores autónomos sin distinción, diferenciando entre los derechos que se atribuyen a éstos de manera individual, de aquellos otros que se atribuyen a las asociaciones que tales trabajadores puedan crear. Tal calificación como “básicos” parece indicar que lo que la LETA viene a configurar es una suerte de estatuto mínimo, que presupone la eventual o futura existencia de otros derechos “adicionales” sobre los cuales la ley nada dice. Se examinan seguidamente ambos grupos de derechos por separado. (*Resumen: Un estatuto mínimo de derechos colectivos “básicos”*).

### **2.1.- Derechos de titularidad individual:**

a) Derecho de afiliación: los trabajadores autónomos son titulares, en primer lugar, del derecho a “afiliarse al sindicato o asociación empresarial de su elección, en los términos establecidos en su legislación correspondiente” (art. 19.1 a) LETA). Se

consagra así la dualidad de vías afiliativas existentes -sindical y empresarial-, como consecuencia del tratamiento unitario que adopta la LETA para todos los autónomos, sin distinguir si éstos son o no empleadores de trabajadores por cuenta ajena: en caso afirmativo, la vía natural será obviamente la de la asociación empresarial. La propia remisión efectuada a la legislación correspondiente a ambas opciones aclara la ausencia de novedad de esta previsión: el artículo 3.1 LOLS es el precepto que reconoce el derecho del trabajador por cuenta propia que no tenga trabajadores a su servicio a afiliarse a las organizaciones sindicales comunes; y por su parte, la Ley 17/1977, de 1 de abril (*vid.* Disposición Derogatoria LOLS), a formar parte de asociaciones empresariales. (*Resumen: La dualidad de vías afiliativas: sindical y empresarial*)

Nada dice este precepto sobre un hipotético derecho de los autónomos a fundar sindicatos. No siendo éste su propósito -ni siendo el rango de ley ordinaria de la LETA suficiente para ello-, la ley acaba olvidando declarar que el autónomo empleador sí que goza del derecho a constituir asociaciones empresariales: tal derecho de fundación, pese a su ausencia literal del precepto citado, sí que corresponde indubitadamente a los trabajadores autónomos empleadores, acogiéndose a la legislación específica a la que expresamente se reenvía.

b) Derecho de afiliación y fundación de asociaciones profesionales específicas: junto al anterior derecho de afiliación, el artículo 19.1 b) LETA reconoce a los trabajadores autónomos el derecho de afiliación y fundación de asociaciones profesionales específicas sin autorización previa. Ya con anterioridad la LOLS (art. 3.1), al negar a los trabajadores autónomos el derecho a fundar sindicatos de categoría, aludía a la capacidad de éstos para constituir asociaciones, de acuerdo con la legislación aplicable a las mismas. Hasta aquí, por tanto, la LETA simplemente viene a declarar la ya existente posibilidad de los autónomos de constituir (y afiliarse a) asociaciones específicas para la defensa de los intereses de los trabajadores autónomos, con amparo en el artículo 22 CE y en la LO 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación. La aportación de la LETA viene dada fundamentalmente por la contemplación adicional de especialidades en el régimen jurídico de dichas asociaciones específicas de autónomos, y en particular, a través de las facultades de actuación colectiva que a las mismas se reconocen (*vid. infra*, apartado 3).

Con todo, conviene señalar el cambio fundamental de perspectiva introducido por la LETA en este terreno. Y es que, si el diseño de la LOLS anteriormente parecía optar por un modelo representativo sustentado en esencia sobre tres grandes ejes básicos (sindicatos, para los trabajadores asalariados; asociaciones de derecho común para los autónomos no empleadores; y asociaciones empresariales para los autónomos empleadores) la LETA alberga ahora el propósito evidente de erigir a las asociaciones profesionales específicas de autónomos en los sujetos centrales o hegemónicos en el ejercicio de la defensa colectiva de los intereses de éstos: tanto de los autónomos empleadores como de los no empleadores, al referirse el ámbito de aplicación de ésta a ambos, a diferencia de la LOLS. (*Resumen: Las asociaciones profesionales específicas de autónomos como cauce central de representación*)

La principal novedad se produce, así pues, en relación con los autónomos empleadores, los cuales, junto con la posibilidad de constituir asociaciones empresariales (reguladas en la Ley 19/1977, de 1 de abril, de asociación sindical), pueden ahora crear asociaciones profesionales específicas de trabajadores autónomos (con amparo en la LO 1/2002, de 22 de marzo, con las peculiaridades dispuestas en la LETA. Ello puede resultar sin duda de interés para pequeños y microempresarios, cuyos intereses singulares quizá difícilmente se vean atendidos en el marco de las grandes asociaciones y confederaciones empresariales.

c) Derecho al ejercicio de la actividad colectiva: tras enumerar los derechos individuales de carácter organizativo, la LETA, siguiendo igualmente el molde de la LOLS, alude al derecho a la actividad o acción colectiva de los autónomos (artículo 19.1 c) ), con la fórmula, no exenta de ambages, del derecho de éstos a “ejercer la actividad colectiva de defensa de sus intereses profesionales”. Huye el texto legal de la posibilidad de efectuar cualquier precisión adicional sobre cuáles hayan de ser las manifestaciones concretas de tal derecho a la defensa colectiva de intereses, y desde luego, de efectuar referencias concretas al ejercicio de derechos de actuación colectiva típicamente laborales, como la negociación colectiva, la huelga o el planteamiento de medidas de conflicto colectivo. El planteamiento general de la LETA, aunque implícito, se asienta sobre la premisa básica de que los trabajadores autónomos no son titulares del derecho de libertad sindical (o, al menos, no lo son plenamente). Lo cual, no obstante, no sirve ni mucho menos para zanjar la cuestión, dada la autonomía constitucional de

todos estos derechos, dotados además, pese a sus interrelaciones (pertenencia al contenido esencial de la libertad sindical), de contenidos y de ámbitos de atribución subjetiva diferenciados.

*(Resumen: El derecho a la actividad colectiva: la indeterminación sobre sus manifestaciones concretas)*

La dinámica aplicativa abierta por la propia Ley está llamada a ser, en buena medida, el factor que acabe dando la medida exacta del alcance de este reconocimiento: entre los temas más candentes está sin duda, en concreto, el de si la LETA ampara un derecho al “paro reivindicativo” (en la terminología adoptada por la propuesta de UPTA) de los trabajadores autónomos, y en particular, de los autónomos económicamente dependientes.

## **2.2.- Derechos de titularidad colectiva:**

Siguiendo nuevamente el esquema de la LOLS, la LETA procede a asignar derechos a sujetos de naturaleza colectiva: en este caso, a dos tipos de organizaciones: por una parte, a asociaciones profesionales de autónomos y a sindicatos “comunes”; y por otro lado, a asociaciones representativas de trabajadores autónomos y a sindicatos más representativos. A los dos primeros, se les otorgan derechos de federación, confederación y unión; de concertación de acuerdos de interés profesional; de defensa y tutela colectiva de los intereses profesionales de los autónomos; y de participación en los sistemas de resolución de controversias colectivas (artículo 19.2 LETA, párrafos a) – d) ). Y, junto a ello, a las asociaciones y sindicatos que gocen de representatividad, se les confieren facultades adicionales, que se tratarán en el siguiente apartado, referidas básicamente a la representación institucional y la consulta contenidas en el artículo 21.5 LETA. Nos centraremos, pues, en este momento, en el núcleo básico y común de los derechos de atribución colectiva. *(Resumen: El núcleo básico o “no esencial” de los derechos de titularidad colectiva).*

- En primer lugar, se atribuyen derechos de naturaleza organizativa (federación, confederación, unión y establecimiento de vínculos), pensando esencialmente en las asociaciones profesionales de autónomos, y no tanto en los sindicatos, que -dejando a

salvo la omisión de la LOLS de la figura de la unión- ya los tienen garantizados. La constitución de tales instancias asociativas de segundo grado (federaciones, confederaciones y uniones) se condiciona por la ley, eso sí, al previo cumplimiento de los requisitos exigidos para la constitución de asociaciones (de autónomos, por parte de la propia LETA, hay que entender), con acuerdo expreso de sus órganos competentes: esto es, obligación de inscripción y depósito de estatutos en el registro específico al efecto. *(Resumen: Derechos de naturaleza organizativa)*

- En segundo término, la LETA reconoce el derecho de todas las asociaciones profesionales de autónomos y sindicatos a celebrar acuerdos de interés profesional para los TAED, en los términos previstos legalmente. Pese a dicha restricción subjetiva, y a la carencia de eficacia normativa y personal general por parte de tales acuerdos, hay que decir, con todo, que es quizá éste el derecho de acción colectiva más importante (amén de novedoso) reconocido por la ley. *(Resumen Derecho a celebrar acuerdos de interés profesional)*

- En tercer lugar, se consagra en su vertiente colectiva el derecho de asociaciones y sindicatos al ejercicio de “la defensa y tutela colectiva de los intereses profesionales de los trabajadores autónomos”. En la línea de lo ya señalado con anterioridad, hay que decir que dicha expresión en modo alguno parece que pretenda hacer referencia al ejercicio de los derechos constitucionales, típicamente laborales, de huelga (artículo 28.2 CE), negociación colectiva (artículo 37.1 CE) o el planteamiento de medidas de conflicto colectivo (artículo 37.2 CE). Ahora bien, dicho lo cual, tampoco parecería atinado afirmar que la misma se refiere a las meras facultades de defensa de intereses propias de cualquier tipo de asociación en defensa de sus afiliados: aún sin que el precepto proceda a especificar o detallar tales funciones, hay que decir que la relevancia del mismo estriba precisamente en su carácter pionero a la hora de reconocer el derecho de todas las asociaciones de trabajadores autónomos a la defensa y tutela colectiva de sus intereses profesionales, amén de las facultades adicionales que la propia LETA contempla para las que gozan de representatividad. *(Resumen: Derecho a la tutela colectiva de intereses)*

- En último lugar, se reconoce el derecho de las asociaciones y sindicatos a “participar en los sistemas no jurisdiccionales de solución de las controversias

colectivas de los trabajadores autónomos, cuando esté previsto en los acuerdos de interés profesional”: nuevamente, pues, se trata de una facultad de actuación que parece circunscrita al ámbito de los TAED (artículo 18 LETA). Sobre la alusión a la previsión en los acuerdos de interés profesional, esta parece venir conectada con la naturaleza de las controversias (esto es, colectivas) en relación con las cuáles se reconoce el derecho, de tal modo que creado el correspondiente sistema de solución extrajudicial por parte de un acuerdo de interés profesional, y dirigiéndose el mismo a las controversias de naturaleza colectiva, la Ley garantiza la participación en los mismos de asociaciones profesionales de autónomos y de sindicatos. *(Resumen: Derecho a participar en sistemas de resolución de controversias colectivas)*

Como consideración final, señalar que el artículo 19.4 LETA aclara que, sin perjuicio de las facultades que corresponden a los sindicatos en el ejercicio de la libertad sindical, éstos gozan, además, de todos estos derechos enumerados en el artículo 19.2 LETA respecto de sus trabajadores autónomos afiliados.

### **3.- LAS ASOCIACIONES PROFESIONALES DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS:**

Quizá una de las mayores innovaciones que aporta la LETA en relación con los derechos colectivos de los trabajadores autónomos venga referida a la cobertura formal y al régimen jurídico del ejercicio del derecho de asociación por parte de éstos. Un derecho de asociación profesional que viene regulado en el artículo 20 y la D.T. 1ª LETA, y por el desarrollo reglamentario de tales preceptos a cargo del RD 197/2009, de 23 de febrero (B.O.E. 4-3-2009): concretamente su Capítulo III (artículos 12-20), donde se regula el Registro Estatal de Asociaciones Profesionales de Trabajadores Autónomos y la D.A 3ª, en relación con la adaptación de los Estatutos de las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos ya existentes con anterioridad a la LETA.

La principal toma de postura de la LETA radica, en este terreno, en la expresa remisión y elección de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación -junto con sus normas de desarrollo- como marco normativo básico por el que ha de regirse el derecho de constitución de asociaciones profesionales específicas de



trabajadores autónomos cuya cobertura constitucional se ampara, en último término, en el artículo 22 CE. Y es que hasta la promulgación de la LETA, las organizaciones de trabajadores autónomos, bien como asociaciones profesionales, o bien como asociaciones empresariales, venían recurriendo a la Ley 19/1977, de 1 de abril, como normativa legal de cobertura para el ejercicio de este derecho asociativo. Si bien formalmente la LETA no altera el panorama, ni deroga dicha normativa, lo cierto es que, a partir de ella, quedan reservados para las asociaciones de autónomos constituidas de conformidad con la misma las facultades y derechos que dicho texto legal contempla (v. gr., entre otros, la adquisición de la condición de asociación representativa prevista en el artículo 21 LETA).

*(Resumen: El marco normativo de referencia : la LO 1/2002, reguladora del derecho de asociación).*

Sintetizando la descripción del panorama normativo vigente tras la LETA, cabría decir que los trabajadores autónomos pueden en principio optar, para constituir asociaciones profesionales, por una de las siguientes tres vías: 1) al amparo de la Ley 19/1977, de Asociación Sindical (cuya vigencia prevé la Disposición Derogatoria LOLS): bien como asociaciones empresariales, bien como asociaciones profesionales específicas de autónomos; 2) de conformidad con la LO 1/2002, reguladora del derecho de asociación, aunque sin respetar las reglas especiales de la LETA; y 3) respetando, además, lo dispuesto en la LETA y en su reglamento de desarrollo (RD 197/2009). Sólo esta tercera opción habilitará, empero, como se ha indicado anteriormente, para disfrutar de los derechos y facultades que en ella se atribuyen a las asociaciones profesionales de autónomos; y, por consiguiente, sin ser el cauce único, se erige lógicamente en la vía primordial al efecto. Todo ello, sin perjuicio del expreso reconocimiento legal de aquellas asociaciones constituidas en aplicación de la legislación precedente y que gozasen de personalidad jurídica en el momento de la entrada en vigor de la LETA, las cuales han podido conservar su reconocimiento cumpliendo con las obligaciones de reformar sus estatutos e inscribirse en el registro correspondiente (D.T. 1ª LETA y D.A. 3ª RD 197/2009).

Y es que el artículo 20 LETA, como se señaló anteriormente, se encarga de precisar que el régimen jurídico de las asociaciones de autónomos será el derivado de la LO 1/2002 y sus normas de desarrollo, con las concretas especialidades contempladas

en la propia LETA: el contenido de aquella norma general resulta, pues, íntegramente aplicable, salvo allí donde ello implique una colisión con las previsiones y las particularidades de ésta (norma especial). Tales especialidades, en esencia, son las siguientes:

*(Resumen: El régimen jurídico-asociativo de la LETA: especialidades)*

1) *Denominación y fines estatutarios*: en su denominación y estatutos, las asociaciones profesionales específicas de trabajadores autónomos deben hacer constar su especialidad subjetiva y de objetivos (artículo 20.2 LETA): la defensa de los intereses profesionales de los trabajadores autónomos y funciones complementarias a dicho objetivo funcional.

2) *Inscripción en un registro específico*: prescribe el artículo 20.3 LETA, como una de las principales especialidades, la obligación de inscribir y depositar los estatutos de las asociaciones profesionales de autónomos en un registro “especial” de la oficina pública establecida al efecto, bien inserta en el organigrama ministerial estatal, o bien en el de la Comunidad Autónoma en la que desempeñe principalmente su actividad. Un registro, en definitiva, “específico y diferenciado” del de cualesquiera otras organizaciones sindicales, empresariales o de otra naturaleza que puedan ser objeto de registro por esa oficina pública.

Por lo que se refiere al ámbito estatal, el RD 197/2009, de 23 de febrero, en desarrollo de dicha previsión legal, vino a crear y regular (Capítulo III) el “*Registro Estatal de Asociaciones Profesionales de Trabajadores Autónomos*”, en el que deberán inscribirse las asociaciones que desarrollen su actividad en el territorio del Estado - siempre que no la desarrollen principalmente en una sola Comunidad Autónoma (esto es, cuando más del 50% de sus asociados estén domiciliados en la misma)-, así como las Federaciones, Confederaciones y Uniones correspondientes a dicho ámbito (artículo 12). Resuelve dicha norma, por cierto, un aspecto no suficientemente esclarecido por el texto legal: el de la necesidad de una doble inscripción. Las asociaciones profesionales específicas de autónomos, al menos como requisito previo a su acceso a este registro estatal, han de estar previamente inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones, en cumplimiento de lo dispuesto en la LO 1/2002 (artículo 10).

*(Resumen: El “Registro Estatal de Asociaciones Profesionales de Trabajadores Autónomos”)*

En cuanto a su organización administrativa, el Registro Estatal tiene carácter único para todo el territorio del Estado (artículo 13 RD 197/2009), siendo el titular de la Subdirección General de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y de la Responsabilidad Social de las Empresas el encargado de dicho registro, correspondiéndole la competencia de adoptar decisiones o acuerdos relativos a la competencia del mismo (artículo 14 RD 197/2009). En cuanto a sus funciones, junto a la inscripción de asociaciones, federaciones, confederaciones y uniones de ámbito estatal, así como de las modificaciones estatutarias, variaciones de los órganos de gobierno y cancelación de las mismas, el Registro Estatal es la instancia competente para expedir las oportunas certificaciones acreditativas de los datos obrantes en el mismo (artículo 15 RD 197/2009). La norma reglamentaria, en fin, se ocupa también de contemplar detalladamente el trámite de inscripción de las asociaciones en el Registro Estatal a partir de la solicitud correspondiente acompañada de la debida documentación (artículo 16); el de cancelación de la inscripción en el Registro Estatal (artículo 19); así como de prever la obligación de las asociaciones de comunicar las modificaciones o alteraciones sustanciales que se produzcan con posterioridad a su inscripción (artículo 18); y del sistema de registro (artículo 20).

3) *Suspensión y disolución*: adoptando una redacción muy similar a la del artículo 2.2 c) LOLS, el artículo 20.5 LETA establece que las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos sólo podrán ser suspendidas o disueltas mediante resolución firme de la autoridad judicial, fundada en incumplimiento grave de las leyes. Especialidad que reside, en comparación con la LO 1/2002, en que en esta última no se exige que la resolución judicial haya alcanzado la firmeza, siendo posible, además, la suspensión provisional de la asociación hasta que recaiga sentencia en el proceso de disolución de la asociación (artículo 38 LO 1/2002).

Téngase presente, no obstante, que si bien la suspensión y disolución de las asociaciones profesionales de autónomos sólo compete a los tribunales, el Registro Estatal es competente para decretar la cancelación de la inscripción de las asociaciones profesionales de autónomos y sus derivados (Federaciones, Confederaciones y Uniones), como consecuencia de circunstancias como la pérdida de alguno de los

requisitos previstos para su calificación (v. gr., pasar a actuar, de manera principal, en una sola Comunidad Autónoma); o la revocación del NIF de la asociación, o por el incumplimiento de la obligación de remisión de datos al propio Registro Estatal (artículo 19 RD 197/2009). Obviamente, hay que entender -entre otras cosas, para evitar la tacha de ilegalidad *contra legem* del precepto reglamentario- que la cancelación registral no implica la disolución ni la suspensión de la asociación como tal, aunque sí la pérdida de sus facultades de actuación como asociación profesional de autónomos *ex* LETA: poder alcanzar la condición de asociaciones representativas, concertar acuerdos de interés profesional, participar en sistemas no jurisdiccionales de resolución de controversias colectivas o ejercer la tutela y defensa colectiva de los intereses profesionales de los autónomos.

#### **4.- LA REPRESENTATIVIDAD DE LAS ASOCIACIONES DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS:**

Guardando de nuevo un acusado paralelismo con la LOLS, el artículo 21 LETA regula la figura de las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos representativas, a las que se otorga una “posición jurídica singular”. Tienen tal consideración aquellas que, inscritas en el registro especial establecido al efecto (artículo 20.3 LETA), demuestren una “suficiente implantación en el ámbito territorial en el que actúen”. Pese a la diferente dicción literal de ambos preceptos, parece coherente sostener, en base a una interpretación sistemática, que tal “ámbito territorial de actuación” en el que ha de medirse la representatividad resulta coincidente con el “ámbito en el que se desarrolla principalmente su actividad”, que ha determinado la elección del registro competente. Por otra parte, y aunque nada se dice expresamente, debe entenderse que el carácter representativo puede ser adquirido tanto por asociaciones de primer grado, como también por Federaciones, Confederaciones y Uniones, lo cual, de hecho, resultará más habitual: tales organizaciones de segundo grado gozan, de hecho, de inscripción; y además serán de ordinario las que gocen del carácter estatal e intersectorial requerido para formar parte del Consejo del Trabajo Autónomo. (*Resumen: Asociaciones representativas de autónomos: implantación en su ámbito territorial*)

Se analizarán separadamente a continuación, en primer lugar, los criterios de determinación de la representatividad; y seguidamente, las facultades y derechos que conforman la especial posición jurídica de las asociaciones representativas.

#### **4.1.- Criterios de determinación de la representatividad:**

Siguiendo la tradición normativa procedente de la esfera de las organizaciones de trabajadores, la LETA vincula la representatividad de las asociaciones profesionales de autónomos a su implantación en un determinado ámbito territorial. Tal implantación debe demostrarse a través de una serie de criterios objetivos y razonables (siguiendo la construcción del TC en el terreno sindical), que la ley enumera de un modo abierto, esto es, sin pretensión alguna de exhaustividad: entre ellos, el grado de afiliación de los trabajadores autónomos a la asociación, el número de asociaciones con las que se hayan firmado acuerdos o convenios de representación o de otra naturaleza, los recursos humanos o materiales, los acuerdos de interés profesional en los que se haya participado, la presencia de sedes permanentes en su ámbito de actuación, o en fin, cualesquiera otros criterios objetivos de naturaleza similar que acrediten dicha implantación, de los cuales quepa deducir, por consiguiente, la representatividad de la asociación. Corresponderá a la norma reglamentaria de desarrollo a la que expresamente alude el artículo 21.1 LETA la concreción adicional de tales parámetros. *(Resumen: Un listado legal abierto de criterios representativos)*

La LETA opta, en este sentido, por distinguir entre dos niveles territoriales relevantes a efectos de la representatividad: el de las asociaciones representativas en el ámbito estatal (artículo 21.1 LETA), y el de las asociaciones representativas en el ámbito de actuación territorial de la correspondiente asociación” (artículo 22.4 LETA) expresión que ampara esencialmente la representatividad al nivel de las CC.AA., tal y como se encarga de aclarar, con posterioridad, la D.A. 6ª LETA, que encarga a las mismas la determinación de representatividad en sus respectivos ámbitos territoriales; lo cual debe obviamente llevarse a cabo en virtud de idénticos parámetros que en el ámbito estatal. Dependiendo el ámbito de representatividad del órgano que la otorga (estatal o autonómico), habrá que entender que se podrá optar a una u otra condición en función de donde se desarrolle “principalmente” la actividad de la asociación. Nada indica la Ley, por otra parte, a diferencia del régimen jurídico-sindical, sobre la representatividad

de las asociaciones en ámbitos funcionales específicos. *(Resumen: Dos niveles territoriales de representatividad: estatal y autonómico)*

Por lo que se refiere al ámbito estatal, la declaración de asociación representativa corresponde a un Consejo, integrado por un número impar de miembros, no superior a cinco, del que han de formar parte funcionarios de la Administración General del estado y expertos de reconocido prestigio imparciales e independientes; un Consejo cuyas resoluciones serán recurribles directamente ante los tribunales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el ámbito de las CC.AA., serán éstas las que, en principio con plena libertad, determinarán el órgano al que se le asigna este cometido, así como la posibilidad, de previsión de recursos en vía administrativa.

#### **4.2.- Facultades y derechos de las asociaciones representativas:**

El artículo 21.5 LETA es el precepto que se encarga de precisar en qué consiste la “singular posición jurídica” que se otorga a las asociaciones de carácter representativo -y también, por cierto, a los sindicatos más representativos-, enumerando cuatro facultades o derechos que son propios de dicha condición: a) ostentar representación institucional ante las Administraciones Públicas u otras entidades u organismos de carácter estatal o de Comunidad Autónoma que la tengan prevista; b) ser consultadas cuando las Administraciones Públicas diseñen las políticas públicas que incidan sobre el trabajo autónomo; c) gestionar programas públicos dirigidos a los trabajadores autónomos en los términos previstos legalmente; y d) cualquier otra función que se establezca legal o reglamentariamente.

*(Resumen: La “singular posición jurídica” de las asociaciones representativas)*

Ciertamente algunos de estos derechos -especialmente los dos primeros- guardan gran parecido, como seguidamente se verá, con las funciones que se asignan al Consejo del Trabajo Autónomo (artículo 22 LETA). No obstante, conviene tener presente que los sujetos a los que se atribuyen son distintos: mientras que el artículo 21.5 LETA atribuye tales facultades a todas las asociaciones representativas (estatales o autonómicas), en el citado Consejo sólo están presentes las que reúnan adicionalmente el carácter de estatales e intersectoriales.

Por lo demás, más allá de las facultades citadas en el artículo 21.5, la LETA concreta y desarrolla, a través de otras previsiones adicionales, las facultades de las asociaciones representativas de autónomos. Es el caso, por ejemplo, de la D.A. 12ª, donde se les encomienda, junto con los sindicatos más representativos, la función de realizar programas permanentes de formación e información, promovidos por las Administraciones Públicas competentes en materia de prevención de los riesgos laborales; o la D.A. 16ª, sobre la colaboración con el Gobierno en la realización de campañas de difusión e información sobre la normativa y características del Régimen Especial del Trabajador Autónomo.

## **5.- EL CONSEJO DEL TRABAJO AUTÓNOMO:**

El Consejo del Trabajo Autónomo (CTA) es el órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y profesional del trabajo autónomo (artículo 22 LETA); un órgano cuya creación la ley asienta sobre la previsión contenida en el artículo 42 de la LO 1/2002, reguladora del derecho de asociación, que habilita para constituir Consejos Sectoriales de Asociaciones, a fin de asegurar la colaboración entre las Administraciones Públicas y las asociaciones, como cauce de participación ciudadana en asuntos públicos.

*(Resumen: Un organo consultivo estatal en materia de trabajo autónomo)*

Si bien en la tramitación parlamentaria de la LETA se eliminó finalmente el calificativo de “estatal” para este órgano, lo cierto es que el mismo convivirá con los correspondientes órganos consultivos que pueden constituir las CC.AA. en sus respectivos ámbitos territoriales, en materia socioeconómica y profesional del trabajo autónomo (artículo 22.7 LETA). Como también lo hará con los Consejos Económicos y Sociales, tanto el de ámbito estatal como los autonómicos. Si bien el papel es similar, el CTA no viene a sustituir a tales órganos, ni a eliminar la representación de los autónomos en los mismos: de hecho, la D.A. 8ª LETA encomienda al Gobierno la misión de plantear la presencia de los trabajadores autónomos en el Consejo Económico y Social, teniendo en cuenta la evolución del CTA en la representación de los mismos y el informe preceptivo del propio CES.

En lo que se refiere a su régimen de composición, el CTA estará formado (artículo 22.3 LETA) “por representantes de las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos representativas cuyo ámbito de actuación sea intersectorial y estatal, por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y por representantes de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y de la asociación de Entidades Locales más representativa en el ámbito estatal”. Además de ello, en el caso de que se constituyesen Consejos de Trabajo autonómicos, formará parte del CTA un representante por cada uno de los existentes. Por lo que se refiere a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, parece lógico entender que se refiere exclusivamente a las que lo sean a nivel estatal, al ser éste el ámbito del CTA: no obstante, siendo esta una cuestión discutible; parece que será el Reglamento llamado a desarrollar la composición y el régimen de funcionamiento de este órgano (artículo 22.6 LETA), el que concrete dicho extremo.

*(Resumen: Composición del CTA)*

En cuanto a sus funciones, dado su carácter de órgano consultivo del Gobierno en lo relacionado con el trabajo autónomo, el artículo 22.2 LETA asigna al CTA una serie de funciones de asesoramiento, elaboración de estudios y emisión de informes.

*(Resumen: Funciones del CTA)*

De este modo, el CTA está facultado para “emitir su parecer con carácter facultativo” sobre: 1º) los anteproyectos de leyes o proyectos de Reales Decretos que incidan sobre el trabajo autónomo, si bien en el supuesto de que se produjesen modificaciones que pudieran afectar al Estatuto del Trabajo Autónomo, el informe tendría carácter preceptivo; 2) el diseño de las políticas públicas de carácter estatal en materia de trabajo autónomo; y 3º) cualesquiera otros asuntos que se sometan a consulta del mismo por el Gobierno de la Nación o por sus miembros. Es notorio, a la vista de lo anterior, cómo el CTA no sólo no sustituye al CES en este terreno, sino que, a diferencia de éste, su intervención consultiva sólo resulta preceptiva (al igual que lo sería la del propio CES) en el caso de anteproyectos de ley con modificaciones que afecten frontalmente a la LETA, y no respecto a cualquier otra norma legal que incidan sobre el trabajo autónomo en general.



Por otra parte, destacar que la D.F. 4ª LETA establece la obligación del Gobierno de informar a las Cortes Generales anualmente sobre la ejecución de las previsiones contenidas en la misma, y entre otras cuestiones, de su desarrollo reglamentario, informe que ha de incorporar “el dictamen de los órganos consultivos”: esto es, tanto del CTA, como de los autonómicos previstos en el artículo 22.7 LETA. Y, en todo caso, el catálogo de competencias del CTA queda abierto, en la medida en que el mismo podrá asumir, además de los cometidos reseñados, y siempre en consonancia con su naturaleza de órgano consultivo, cualesquiera otros que se le atribuyan en lo sucesivo por vía legal o reglamentaria (artículo 22.2 d) LETA).

**BOX: ASOCIACIONES PROFESIONALES DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS (EX - LETA): CUADRO BÁSICO DE DERECHOS Y FACULTADES:**

**A) Núcleo básico o “esencial” de derechos: (todas las asociaciones)**

- Derechos de naturaleza organizativa (federación, confederación, unión y establecimiento de vínculos interasociativos).
- Celebración de acuerdos de interés profesional (TAED).
- Defensa y tutela colectiva de intereses de los autónomos.
- Participación en sistemas de resolución de controversias colectivas (TAED).

**B) Facultades (adicionales) de las Asociaciones representativas:**

- Representación institucional ante Administraciones Públicas.
- Consulta ante las políticas públicas sobre el trabajo autónomo.
- Gestión de Programas públicos dirigidos a autónomos.
- Otras que se contemplen legal o reglamentariamente.

**C) Asociaciones representativas de ámbito intersectorial y estatal:**

- Presencia en el Consejo del Trabajo Autónomo (CTA).

## 6.- BIBLIOGRAFÍA:

- RODRÍGUEZ-RAMOS VELASCO, P.: “Los derechos colectivos de los trabajadores autónomos”, en CRUZ VILLALÓN, J.; VALDÉS DAL-RE, F. (Dir.): *El Estatuto del Trabajo Autónomo*. La Ley, Madrid, 2008; pp. 331-374.
- SÁNCHEZ TORRES, E.: “Los derechos colectivos de los trabajadores autónomos”, en DEL REY GUANTER, S. (Dir.); CONDE VIÑUELAS, F., GALA DURÁN, C. (Coord.): *Comentarios al Estatuto del Trabajo Autónomo*. Lex Nova, Valladolid, 2007; pp. 213-240.
- SEPÚLVEDA GÓMEZ, M.: “Derechos colectivos y de representación de los trabajadores no asalariados”, *Temas Laborales*, nº 81, 2005, pp. 173-205.
- TÁRREGA POVEDA, J.: “Los derechos colectivos de los trabajadores autónomos”, en LUJÁN ALCARAZ, J (Dir.): *El Estatuto del Trabajo Autónomo. Análisis de la Ley 20/2007, de 11 de julio*. Ediciones Laborum, Murcia, 2007, pp. 207-251.
- YSAS MOLINERO, H.: “El derecho de participación institucional en el Estatuto del Trabajo Autónomo: especial referencia al Consejo Estatal del Trabajo Autónomo”, *Relaciones Laborales*, 2008-II, pp. 433-448.

## 8.- SITIOS WEB.

- [www.autonomos-ata.com](http://www.autonomos-ata.com) (Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos: ATA).
- [www.ceat.org.es](http://www.ceat.org.es) (Federación Española de Autónomos: CEAT)
- [www.upta.es](http://www.upta.es) (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos: UPTA)

- [www.autonomos-asnepa.com](http://www.autonomos-asnepa.com) (Asociación Nacional de Empresarios y Profesionales Autónomos: ASNEPA)
- [www.caype.es](http://www.caype.es) (Confederación de Autónomos y Profesionales de España: CAYPE).
- [www.opa.es](http://www.opa.es) (Organización de Profesionales y Autónomos: OPA)

## **9.- ACTIVIDADES:**

1.- Realizar un informe sobre la constitución simulada de una asociación profesional de trabajadores autónomos: cauces normativos disponibles, normativa legal y reglamentaria de aplicación (estatal o autonómica), inscripción previa en el Registro Nacional de Asociaciones, elección del registro competente por razón del territorio, documentación que debe acompañar a la solicitud, etc.

2.- Recabar información sobre las distintas asociaciones de trabajadores autónomos existentes en el ámbito estatal y en el autonómico correspondiente; su representatividad e implantación y su carácter profesional o interprofesional. Averigüe igualmente el estado de institucionalización de los cauces de representación y de participación institucional de los trabajadores autónomos en su Comunidad Autónoma.

3.- Investigar sobre los resultados recientes del diálogo social en el ámbito del trabajo autónomo, tanto en el ámbito estatal como en el de su Comunidad Autónoma: (acuerdos de Mesas Sectoriales sobre el Trabajo Autónomo, etc.), y, en particular, sobre la adopción de medidas normativas e institucionales a partir de dicho diálogo social.